

C.A. de Santiago

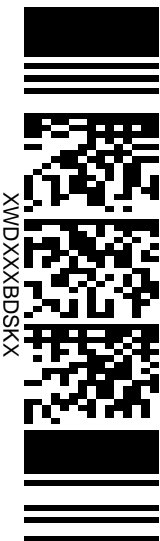
Santiago, diez de agosto del año dos mil veintidós.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece doña Alejandra Rojas Torrent, empresaria, en representación de Comercial Ventto SpA, e interpone reclamo de ilegalidad fundado en el artículo 19 de la Ley N°18.410, en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por los actos administrativos que corresponden a Resolución Exenta N°11030, dictada con fecha 25 de febrero de 2022, por la cual aplicó una multa de 80 UTM, y a Resolución Exenta N°35285, dictada con fecha 16 de mayo de 2022, por la cual rechazó el recurso de reposición deducido en contra del acto citado precedentemente, la que fue notificada a esta parte con fecha 25 de mayo de 2022.

Sostiene que la multa fue aplicada, según se expresa en el considerando 4° de la primera resolución por comercializar productos, en este caso ventiladores de cielo, sin contar con certificados de aprobación otorgados por un organismo certificador autorizado por la Superintendencia, lo que constituye una trasgresión a lo establecido en el artículo 3° N°14, de la Ley 18.410, y los artículos 6° y 27°, letra a), del D.S. N°298 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Añade que, en contra de dicha resolución, se presentó recurso de reposición pidiendo dejar sin efecto la sanción, o en subsidio, rebajarla acompañando precisamente los Certificados de Aprobación Nos. E-013-04-10265 y E-013-04-10266, emitidos por el Organismo de Certificación autorizado por la recurrida -LENOR CHILE SPA- amparando los ventiladores de cielo raso importados por la



reclamante y que son los certificados que la resolución recurrida señala como inexistentes.

Explicita que al resolver el recurso de reposición la Superintendencia reconoció la existencia de los certificados que echaba de menos, pero mantuvo la multa cambiando ahora el motivo de su aplicación arguyendo que los artefactos referidos en esas certificaciones y los posteriormente importados no contaban con el Certificado de Seguimiento a que se refiere el apartado 4.7 del artículo 4º del Reglamento de Productos Eléctricos, Decreto Supremo 298, del Ministerio de Economía, sin tampoco haberse establecido si los artefactos pretendidamente no cubiertos con aquellas certificaciones habían sido comercializados, condición esencial para dar por constituida la infracción legal que establece el artículo 27 de este Reglamento.

Afirma que la recurrida cambió el fundamento de la multa aplicada pues acreditada que fue la existencia de los certificados que daban cuenta que los artefactos cumplían con la normativa exigida, que tal es el objeto de la certificación de aprobación según el numeral 4.6 del citado precepto reglamentario descubrió que no contaban con el Certificado de Seguimiento, que es un documento diferente en su objetivo y época de emisión, motivo por el cual se ha producido una indefensión absoluta de esa reclamante pues ya no resultaba procedente plantear un recurso de reposición contra lo resuelto respecto de otro recurso de reposición, como es sabido en demasía, aunque lo fundamental de este nuevo e improcedente recurso fuera el sostener que esta diferente omisión no está configurada como sancionable por el artículo 27 del citado D.S. 298 que es el precepto que contiene los hechos susceptibles de ser castigados pues lo que



sanciona es la falta del Certificado de Aprobación y en parte alguna la falta del Certificado de Seguimiento.

Sostiene que la sanción impuesta debe dejarse sin efecto y en subsidio, considerando que la propia recurrida califica como leve la supuesta infracción que se dice cometida, aparece de manifiesto que el monto de la multa es exagerado e improcedente al no haberse respetado los parámetros para imponerla que se encuentran descritos en el artículo 16 de la Ley 18.410, puesto que el número de usuarios que pudo ser afectado por la infracción imputada es tan insignificante como el número de artefactos importados, así como insignificante el riesgo si los ventiladores de iguales características y fabricantes ya habían sido sometidos a examen y aprobación. Tampoco se atendió a la modesta cuantía de los ventiladores importados y a la igualmente modesta capacidad económica de la reclamante que se acredita con certificado de capacidad económica acompañado, que muestra un capital casi equivalente al monto de la multa aplicada.

Finalmente, alega que se desatendió una circunstancia fundamental para aplicar una sanción condigna, cual es el no haber cometido anteriormente falta alguna a la ley y el reglamento que regula la comercialización de estos artefactos, como la recurrida lo reconoce.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la sanción impuesta o, en subsidio, se rebaje la sanción a una amonestación por escrito o, en subsidio, a una multa no superior a dos UTM.

SEGUNDO: Informa el abogado don Sebastián Leyton Pérez, Jefe de la División Jurídica en representación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicitando el rechazo en todas sus

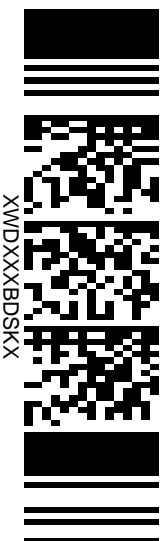


partes de la reclamación, por carecer de todo sustento en los hechos y el derecho, con costas.

Sostiene que con fecha 15.10.2021, mediante Oficio Ordinario N°90054, dicha Superintendencia formuló cargos a la reclamante por la comercialización de ventiladores de cielo sin previa certificación de seguridad importados entre el periodo 01.05.2020 y 30.04.2021, de acuerdo al cruce de información entre las declaraciones de importación en el Servicio Nacional de Aduanas y la base de datos donde se registran las certificaciones emitidas por las entidades de certificación autorizada por esta Institución.

Luego, y previos descargos de la reclamante, donde alegó que los artefactos investigados se encontraban certificados de acuerdo con el certificado N°E-013-04-10265, marcado de seguridad QR N°264213, de fecha 17.05.2018, emitido por el Organismo de Certificación LENOR Chile SpA, esta Superintendencia emitió la Resolución Exenta N°11030, de fecha 25.02.2022, sancionándose con multa administrativa equivalente a 80 UTM a la fiscalizada infractora que reclama.

Finalmente, con fecha 16.03.2022, la reclamante interpuso recurso de reposición en contra de la multa aplicada, alegando que los productos se encontraban amparados en los certificados de aprobación números E-013-04-10265 y E-013-04-10266, de fecha 17.05.2018. Sin embargo, fue rechazada la impugnación de mérito atendido que los certificados invocados no amparaban los artefactos objeto de la investigación, toda vez que fueron emitidos antes de la importación de los productos investigados, de acuerdo con la Resolución Exenta N°25285, de fecha 16.05.2022.



Precisa que el encuadre jurídico se basa en la Ley N° 18.410, artículo 3° N°14, inciso 2°, que prescribe que para comercializar un producto sometido al sistema de certificación debe contarse previamente con el debido certificado de aprobación. Luego, el Decreto Supremo N°298/2005, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, prescribe en su artículo 6 que los productos con obligatoriedad de certificación previamente a su comercialización en el país deben certificarse por alguno de los sistemas de certificación para efectos de evaluar su conformidad con los protocolos aplicables, siendo, entonces, obligación de todo comercializador certificar previamente los productos que comercializa, según el artículo 27, letra a), del decreto en comento, artículo que sin perjuicio de otras conductas sancionables, enumera hechos ilícitos típicos realizados por fabricantes, importadores o comercializadores, como la falta de certificación.

Para estos efectos, el artículo 36, letra a), del D.S. N°119/1989 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dispone que se entenderá por comercialización tener para la venta, vender, comprar o permutar productos eléctricos o de combustibles. Se considerará iniciada la comercialización desde el almacenamiento de los productos en las bodegas de despacho de los fabricantes o importadores.

Luego, el artículo 4.7 del D.S. N°298/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, define los certificados de seguimientos como los documentos otorgados por un organismo de certificación, que acredita que la producción o partida de un producto continúa estando conforme con el tipo aprobado, por mientras el artículo 5 establece que la certificación de los productos debe



efectuarse aplicando alguno de los sistemas establecidos en la tabla I, para el caso sistema N°1 de ensayo de tipo seguido de control regular de los productos, reconocido en el protocolo 1/24, de 2007, cuyo ámbito de aplicación alcanza a los productos investigados.

En cuanto a las alegaciones de fondo:

Sostiene que dicha Superintendencia advierte que los considerandos del acto terminal son totalmente consistentes a los considerandos del acto de revisión, toda vez que en ambos se tienen por no amparados con certificados de aprobación los productos investigados, en tanto no existir certificados de seguimientos que amplíen el alcance de los certificados de aprobación vinculados a los modelos fiscalizados.

En este orden de ideas, afirma que el sistema de certificación consiste en evaluar una unidad de un modelo o familia de modelos completamente, aplicando todos los ensayos correspondientes y, luego, se emite un certificado de aprobación para el modelo cuando se extraen aleatoriamente unidades de un universo, que cumplen con los estándares mínimos de seguridad de los ensayos reducidos. Sin embargo, y dado que se desconoce si las unidades que conforman nuevos universos, partidas o lotes, siguen cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad, se deben someter a seguimientos aleatorios y reducidos, única forma de tener por ampliado el alcance del certificado de aprobación vinculado al modelo hasta las unidades comprendidas en las nuevas partidas o lotes que se buscan comercializar en el país.

Asevera, que lo que no quiere entender la reclamante, es que los hechos investigados configuran la sanción por comercializar productos sin certificados de aprobación, dado que sin certificados de



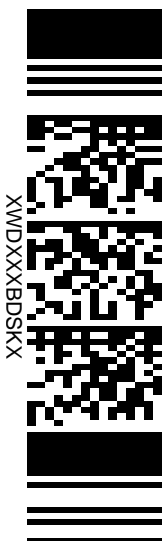
seguimientos los productos de la partida importadas no quedan amparados por el certificado de aprobación vinculado al modelo.

A mayor abundamiento, refiere, que la reclamante intenta plantear que al existir certificado de aprobación sobre el modelo las unidades investigadas están certificadas, pero tal forma de pensar contradice la esencia de un sistema de certificación, más en seguridad, donde se busca mediante seguimientos a la producción verificar que las nuevas unidades continúan diseñándose y fabricándose igual que el tipo, que cumplió con los estándares mínimos fijados por las normas técnicas incorporadas al protocolo aplicado al producto investigado.

Señala entonces que queda claro, además, que en ningún caso el fiscalizado ha quedado en la indefensión para plantear sus alegaciones al proceso administrativo que sustenta la sanción aplicada.

Indica que en cuanto la falta de comercialización es un hecho público y notorio sobre la calidad comercial del administrado como también la máxima de la experiencia relativa a la rotación de inventario para un mejor desempeño operacional de las empresas y, por otra parte, la fechas y cantidad de productos importados y, con ello, la regulación que tiene por comercializados los productos desde que se encuentran en las bodegas de la importadora, según se consigna más arriba.

Cita lo decidido en jurisprudencia de la Corte Suprema donde se ha indicado que, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, existe el concepto de culpa infraccional, y que, en este caso en particular, se ha aplicado una sanción al respectivo infractor, quien actuó de forma negligente en el cumplimiento de sus



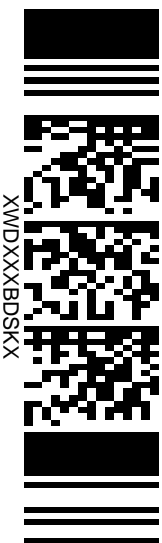
obligaciones, al no realizar la certificación previa a la comercialización a los productos.

Argumenta que la responsabilidad de la reclamante emana de la culpa, es decir, está fundada en su propia negligencia o falta de diligencia, la que causó un daño al infringir la obligación establecida en el DS 298/2005 y en la Ley 18.410.

Expone que, en cuanto a la magnitud de la multa aplicada, parece necesario recordar que, si bien el monto es cuantitativo, la calidad de sanción de la multa la define como una cuestión cualitativa, como una ponderación valorativa entre el reproche y el agravio al bien jurídico afectado. En este sentido, la infractora ha puesto en peligro la seguridad de las personas al ponerse en contacto los usuarios con productos sin saber previamente si cumplen con los estándares mínimos de seguridad, un hecho intolerable para nuestro sistema jurídico, que establece que los productos peligrosos se deben someter al sistema de certificación.

En este orden de ideas, para esta Superintendencia resulta proporcional y eficaz – deber de los actos administrativos de acuerdo con el artículo 3° de la Ley N°18.575- una multa de 80 UTM para una infracción leve, que según el artículo 16 A de la Ley 18.410, puede ser sancionado con una multa en el rango de 1 UTM a 6000 UTM que habilita la Ley a esta Institución.

Luego, y más allá que la falta de certificación implica necesariamente peligro para las personas, en tanto entran en contacto con artefactos sin antes conocer si cumplen con los estándares mínimos de seguridad, al momento de fijarse el reproche se tuvo a la vista que fueron investigadas diferentes partidas



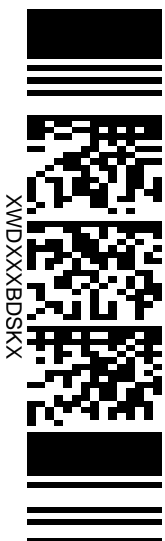
ocurridas a lo largo de un tiempo prolongado, incorporándose al mercado más de 500 artefactos.

Finalmente, por una parte, esta Institución no tuvo por concurrente la circunstancia agravante modificatoria de responsabilidad de reincidencia y, por otra parte, entre nosotros la capacidad económica de una empresa se determina por sus ventas anuales, de acuerdo con la Ley N°20.416, cuestión natural cuando se tiene a la vista que el capital no tiene relación alguna con el tamaño de la empresa como tampoco los márgenes de utilidad.

TERCERO: Que, en la especie, se ha reclamado la ilegalidad de una resolución dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conforme a la cual se ha sancionado a la sociedad Leonor Chile SpA con una multa de 80 Unidades Tributarias Mensuales.

CUARTO: Que la sanción administrativa se ha aplicado por parte del SEC, de acuerdo con las facultades que le permite el ordenamiento jurídico a la Administración del Estado, las que se conocen en doctrina como “*Actividades de Policía*”, que son aquellas que limitan los derechos de las particulares por razones de interés general y con el objeto de alcanzar la mantención del orden público. Esta actividad es ejercida principalmente por las Superintendencias, encontrándose entre ellas, la Superintendencia recurrida, como se acreditará a continuación.

QUINTO: Que, en efecto, la acción para reclamar de ilegalidad se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, que crea la SEC, a cuya interposición le antecede una etapa previa administrativa, siendo legitimados activos para interponer en esta sede jurisdiccional “*Los afectados que estimen que las resoluciones*

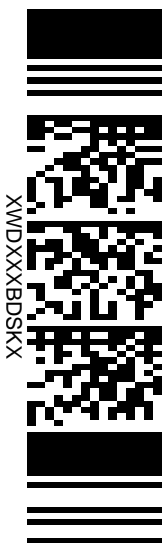


de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que les corresponda aplicar”.

SEXTO: Que, en tal sentido, el artículo 2 del citado texto legal, dispone como objeto de la creación del ente administrativo SEC, la facultad de : *“Fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyen peligro para las personas o cosas”;* función que le otorga por cierto, la potestad para sancionar el incumplimiento de la normativa. Así el artículo 3 en su numeral 23, dentro de las facultades específicas señala: *“Sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias vigentes...con, multas.....”.*

SEPTIMO: Que el reclamante mediante la presente acción no ha desconocido la facultad de la recurrida de imponer sanciones como tampoco la existencia de los hechos que dieron origen a la aplicación de la mismas, sino que el quantum de la misma, pues al exceder y contravenir-en su concepto- el principio de proporcionalidad, la haría arbitraria e ilegal.

OCTAVO: Que, doctrinariamente, se ha considerado que dentro del procedimiento administrativo sancionador, debe cumplirse con una serie de principios, entre aquellos los que dicen relación con la graduación y ponderación al tiempo de aplicarse la sanción. Si bien no existe un catálogo formal de quienes conforman el principio de proporcionalidad, se han indicado entre ellos, a saber: regla de la



sanción mínima; de la gravedad de la infracción, del daño causado, situación económica del infractor, intencionalidad, existencia de reiteración y reincidencia. (Jorge Bermúdez Soto, Derecho Administrativo General, páginas 349 a 353)

NOVENO: Que en la ley en estudio, es en el artículo 16, el que determina el quantum de la multa y las circunstancias que deben considerarse por el ente fiscalizador para los efectos de imponer la multa. Para tales efectos es necesario traer a colación la norma, la que señala que:

“Artículo 16.- De acuerdo con la naturaleza y gravedad de las infracciones, determinada según lo Art. 1º N° 4 previsto en las normas del presente Título, éstas podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

- 1) Amonestación por escrito;*
- 2) Multa de una unidad tributaria mensual a diez mil unidades tributarias anuales;*
- 3) Revocación de autorización o licencia;*
- 4) Comiso;*
- 5) Clausura temporal o definitiva, y*
- 6) Caducidad de la concesión provisional.*

Para la determinación de las correspondientes sanciones, se considerarán las siguientes circunstancias:

- a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado.*
- b) El porcentaje de usuarios afectados por la infracción.*
- c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.*
- d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.*
- e) La conducta anterior.*



f) *La capacidad económica del infractor, especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado.* “

DECIMO: Que la reclamada ha calificado la infracción cometida por la recurrente como leve. En tal sentido, el número 3.- del artículo 16 A de la Ley en estudio señala: *“Sin perjuicio de las sanciones que establezcan leyes especiales, las infracciones tipificadas precedentemente podrán ser sancionadas con:*

3.- Multa de hasta quinientas unidades tributarias anuales o amonestación por escrito, tratándose de infracciones leves.”

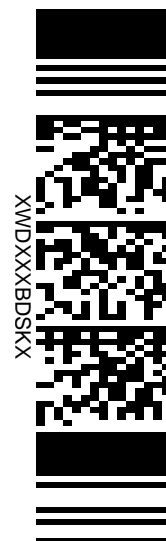
UNDECIMO: Que, como consta de los antecedentes que se han tenido a la vista, la recurrente no había sido sancionada con anterioridad, por lo que esta Corte tiene en especial consideración lo establecido en la letra e) del artículo 16 de la Ley, transcrito precedentemente, lo que permite entender a este Tribunal que la sanción impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, si bien se encuentra enmarcada dentro de la normativa legal, la misma resulta desproporcionada.

Por lo expuesto, citas legales y lo dispuesto en la ley 18.410, **se acoge**, sin costas, la reclamación deducida por Comercial Ventto SpA en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, solo en cuanto se rebaja la multa impuesta a la recurrente de 80 unidades tributarias mensuales a **40** unidades tributarias mensuales.

Regístrese y comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett.

Contencioso-Administrativo N°279-2022.



Pronunciada por la Cuarta Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por el Fiscal Judicial señor Daniel Calvo Flores y el abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett.

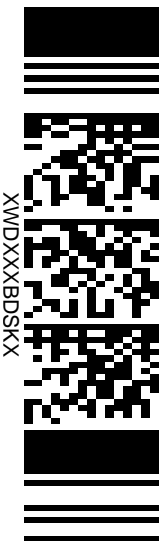
Autoriza el (la) ministro de fe de esta ltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diez de agosto de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G., Fiscal Judicial Daniel Calvo F. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, diez de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>